

DISCURSO Dip. Prof. Lilián Galán Rendición de Cuentas 2022 /

Montevideo, 14 de Agosto 2023

Sr. Presidente me corresponde presentar las razones que llevan a la Bancada del Frente Amplio a votar negativamente en general este proyecto de ley.

Transcurriendo la última etapa del cuarto año de gobierno, un análisis de la Rendición de Cuentas, permite caracterizar y evaluar los resultados de las políticas públicas llevadas adelante, el proyecto político en curso y el relato que lo acompaña

El oficialismo hace una “rendición de cuentas” de tono marcadamente exitista, según la cual parecería que, por acción del gobierno, la mayoría de los uruguayos viven bien y cada vez mejor, los más vulnerables son objeto de cuidados más que suficiente y, también, que el país transita una senda de desarrollo y progreso.

PARA MUESTRA basta UN BOTÓN. Dice el MIDES en el informe presentado a los diputados de la comisión “Mediante el PAT, se materializa el derecho de alimentar a saciedad (curioso concepto para ser introducido a la hora de explicar una política pública, definir que una persona queda saciada con la porción que aparentemente le corresponde).... A junio de 2023 el precio promedio de cada vianda es de \$154.28. Incluyendo equipamiento de los puntos de distribución, traslados y remuneración del personal proporcionado por la empresa distribuidora”.

El MIDES no hace políticas públicas, hace milagros!!!

Para el oficialismo los problemas económicos son siempre ajenos (vienen de “antes” y/o son exógenos/externos) al tiempo que las fortalezas económicas, financieras, sociales e institucionales, son ignoradas (salvo cuando se trata de “presentar” a los inversores extranjeros las virtudes del país).

A su vez, los compromisos de campaña (aquel “se terminó la suba de impuestos, tarifas y combustibles” que aún resuena) quedaron en el olvido.

La crisis hídrica es un buen ejemplo de la forma en que gestiona los problemas el gobierno: poniéndolos, en lo posible, fuera de su área de responsabilidad.

Y reaccionando ante el desastre instalado, tarde y mal.

La larga inacción y desprolijidad de la respuesta ante un problema tan básico como la provisión de agua potable, la padecemos todos: ciudadanía y sistema productivo.

En el plano de la realidad, el gradual pero notorio deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías, y en particular de los sectores más vulnerados, es sistemáticamente minimizado.

En efecto, la indigencia está plenamente instalada en las calles de Montevideo y la pobreza infantil se consolida.

A su vez, el empleo se recupera en cantidad, pero no en calidad. El salario de los trabajadores recién empieza una senda de recuperación que, en el mejor de los escenarios, lo habría de llevar a que a fines de 2024 con suerte se vuelva a los niveles de 2019. Obviamente esto repercute en que también las pasividades acumulen fuertes deterioros.

Por otro lado, y en un marco general de decaimiento en el acceso a servicios públicos de calidad, la ciudadanía, y en particular la que reside y trabaja en las áreas más pobres, padece la inseguridad pública, la salud pública sufre faltantes de todo tipo, las promesas de planes de vivienda y erradicación de asentamientos quedaron en el aire y la “transformación educativa” es poco más que un eslogan.

El crecimiento económico será de 8,7% para el quinquenio, lo que equivale a un magro crecimiento de 1,7% anual. Este pobre dinamismo económico nos ubica entre los países con peor desempeño económico de la región, considerando la pandemia y la recuperación posterior.

Y no sólo el crecimiento previsto por el equipo económico es muy pobre, además sus resultados están siendo muy mal distribuidos, favoreciendo a pocos, dando legitimidad a la tristemente famosa expresión de los “malla oro”.

En el plano productivo, la heterogeneidad del aparato productivo se profundiza en beneficio de un puñado de sectores. Al tiempo que, a pesar del gran deterioro de la competitividad cambiaria, los sectores productivos más conectados a los mercados internacionales (típicamente los vinculados a la producción agroindustrial y la provisión de servicios globales) mantienen ciertos niveles de rentabilidad.

Sin embargo, los vinculados al mercado interno: PYMES y pequeños comercios, sufren las consecuencias de una política económica que no los contempla.

En particular, la situación de las empresas en la frontera con Argentina es muy grave, e insólitamente, son ignoradas por el Poder Ejecutivo.

El deterioro general de la competitividad no proviene exclusivamente de la política monetaria y cambiaria implementada por el Banco Central del Uruguay, ni de la falta de políticas productivas.

El gobierno adoptó decisiones que afectaron la capacidad de competencia de nuestra economía, como la “entrega” del Puerto de Montevideo a un monopolio privado que, hasta el año 2081, habrá de perjudicar la competitividad del sistema exportador e importador en su conjunto. Sumado a lo anterior, tenemos que la inserción económica regional e internacional, no ha mejorado a pesar de las reiteradas promesas de los tiempos de campaña electoral, cuando la mejora al acceso a los mercados era presentado como tan fácil de lograr.

La “institucionalidad fiscal” exhibe sus falencias. La proclamada “transparencia” en el manejo de los recursos públicos, coexiste con múltiples iniciativas que abonan exactamente lo contrario, la opacidad y discrecionalidad.

La autodefinida “responsabilidad fiscal”, que fue la excusa para procesar en los primeros años del gobierno ajustes y recortes poco sustentables, ha ido dejando lugar al gradual despliegue de un “carnaval fiscal-electoral”, que no sólo no cumple con el pasado compromiso de bajar sustantivamente el déficit fiscal, sino que acotará fuertemente los márgenes de acción del próximo gobierno.

Es así que asistimos al uso y abuso de instrumentos, tales como los fideicomisos financieros y los Cremafs, que implican gastos no registrados en las cuentas públicas (“por fuera del perímetro fiscal”, según la expresión que se reitera.)

Con esto, no sólo se escapa al control parlamentario, sino que también tendrá serias consecuencias sobre los márgenes de acción de los próximos gobiernos.

También la construcción de capacidades para enfrentar una época de cambios acelerados está ausente, comprometiendo el futuro del país y, en particular, transformando las oportunidades que se presentan en serios riesgos.

Los acelerados cambios en el mundo educativo, productivo, laboral y cultural que transitamos de la mano de la nueva revolución industrial y tecnológica, exigen poner a disposición de la sociedad recursos, políticas y transformaciones institucionales que, lamentablemente, están ausentes en esta Rendición de Cuentas.

El desamparo al que son sometidos tanto la enseñanza pública terciaria -la Udelar y la Utec-, como el sistema de investigación científico y de innovación, y las propias agencias de formación de trabajadores, son testimonio de la hipoteca que se coloca sobre el futuro del desarrollo económico y social.

Es imposible analizar esta RC sin enmarcarla en el conjunto de los cinco años de gobierno. La estrategia presupuestal y fiscal del gobierno fue recortar fuertemente el gasto al principio del período, para expandir el gasto al acercarse las elecciones.

Esta estrategia estaba predefinida con independencia de lo que pudiera pasar. Se mantuvo firme incluso habiendo sido atravesada por una crisis sanitaria, social y económica a escala mundial, sin precedentes.

El recorte comenzó a instrumentarse con el decreto de ajuste (Decreto N° 90/020) y la Ley de Presupuesto Nacional, para luego en 2021 y 2022, centrar la discusión presupuestal en recuperar lo perdido.

A medida que se acercan las elecciones comienza a aumentar el gasto, para terminar en un nivel de gasto en términos reales posiblemente mayor que el de 2019, aunque menor en relación al PIB, al esperarse que la economía crezca menos de 9% durante este quinquenio.

El recorte fue básicamente en salarios y pasividades, en contra de lo que se había anunciado en la campaña electoral, cuando se decía que era posible recortar el gasto en 900 millones de dólares sin afectar salarios y pasividades.

Esto no fue así!!! La masa salarial del gobierno se redujo en 0,5% del PIB y las pasividades en 0,6% del PIB. Ese es el grueso del ajuste fiscal!!

Es un ajuste de mala calidad, que recae sobre las espaldas de los trabajadores y de los jubilados y pensionistas. Y es un ajuste transitorio, que solamente reprimió el gasto, y que no instrumentó cambios estructurales que modifiquen la forma en que el Estado gasta, haciéndolo más eficiente.

Además, es importante recordar que el Fondo Covid fue utilizado para amortiguar recortes de gasto permanente en el MIDES, para comprar medicamentos en ASSE y hasta para la compra de tobilleras en el MI.

Pese a ello, el gobierno consideró que todo el gasto del Fondo Covid se destinó a hacer frente a la pandemia, y por lo tanto se trataría de un gasto excepcional y transitorio, por lo que no se toma en cuenta en la estimación del resultado fiscal estructural.

En este proceso hay ganadores y perdedores.

Los ganadores: son pocos los organismos que a 2022 tienen una ejecución presupuestal mayor a 2019. Estos son, en orden decreciente: MTOP (37% real), MSP (35%), UTEC (27%), MIDES (11%, siendo por lo pronto lógico que crezca, dada la situación social y, además, porque apoyos que daba el Fondo Covid pasan a ser presupuestales), MDN (4%).

Los que empatan: recién en 2022 algunos organismos relevantes logran recuperar más o menos los niveles que tenían en 2019: Ministerio del Interior, ASSE e INAU. El gasto del Ministerio del Interior crece apenas un 1% respecto de 2019, lo que no se condice con la crisis de seguridad que vive el país ni mucho menos con las promesas de campaña. Tampoco el nulo incremento en ASSE (caída de 1% respecto de 2019) se condice con la peor crisis sanitaria de la historia reciente. El INAU, a pesar de todos los anuncios de priorizar la primera infancia, gastó apenas un 1% más que en 2019 en términos reales (apenas 2 millones de dólares por encima) y en el acumulado de los 3 años se redujeron los recursos que se le asignan en 44 millones de dólares.

Los perdedores: En 2022 la mayor parte de los organismos estuvo por debajo de los niveles de ejecución de 2019. Planteamos sólo algunos ejemplos bien gráficos y significativos:

ANEP: el gasto total de ANEP es 3% menor que en 2019 en términos reales, se redujo el gasto por alumno, la masa salarial de ANEP en 2022, es unos 120 millones de dólares menor que en 2019, y el monto total perdido por los trabajadores del sector en tres años, al no recuperarse la inflación en cada ajuste, es de 280 millones de dólares. En definitiva, el recorte de ANEP es reducción del salario docente y menor cantidad de horas docentes. ¿Esto es eficiencia????

UDELAR: el gasto real se redujo en 6% respecto de 2019, a pesar del fuerte aumento de la matrícula. La masa salarial de UDELAR de 2022 en términos reales está 4% por debajo de la de 2019, y si sumamos la disminución de los tres años, el recorte de la masa salarial es de 42 millones de dólares. ¿Esto es eficiencia????

Ministerio de Vivienda: las inversiones del MVOT están 6% por debajo de 2019 en términos reales. En los tres años se le sacaron recursos por unos 80 millones de dólares en términos reales al Ministerio de Vivienda. ¿Así se prioriza la atención de la problemática de la vivienda y los asentamientos????

INISA: el nivel de gasto en términos reales está 7% por debajo de 2019 y en estos tres años se le sacaron recursos en términos reales por 11 millones de dólares. ¿Esta es la forma de priorizar la tan denunciada problemática de los jóvenes infractores????

¿Cuáles son las asignaciones de esta rendición de cuentas? Primero debemos hablar de las asignaciones del Poder Ejecutivo, luego veremos lo que pasó en esta casa. Y es que en la medida que se acerca 2024 la coalición pierde cohesión!

Esta rendición de cuentas incrementa el gasto en unos 10 millones de dólares para 2023 y en unos 75 millones de dólares a partir de 2024.

Las principales asignaciones corresponden al MTOP por unos 25 millones de dólares, a salud mental por unos 20 millones de dólares, a otros temas de salud por unos 8 millones y unos 10 millones de dólares para los proyectos por PPP.

Justamente esta asignación del MTOP deja claramente en evidencia que las rendiciones de cuentas de este gobierno son engañosas y sólo muestran una pequeña parte del gasto que se está haciendo.

Se asignan 25 millones de dólares para el MTOP, pero en realidad se incrementan las obras viales que se van a hacer por la CVU en 400 millones de dólares respecto de lo que constaba en la exposición de motivos del año pasado. Las inversiones viales pasan de 1.500 a 1.900 millones de dólares, pero sólo se asignan 25 millones de dólares en esta rendición de cuentas por cada 100 dólares pagados.

La propuesta del Poder Ejecutivo no pone ni un peso para financiar la tan anunciada reforma educativa que el gobierno promueve; tampoco asigna créditos para ciencia y tecnología; ni tampoco para financiar la reforma del Estado que vienen anunciando como la panacea, pero resulta que ahora no asignan los recursos para implementarla. Esto es Hacerse Cargo y gestión eficiente?????

Lo que sí se propone es seguir bajando el IASS. La baja del IASS hecha en 2023 ya cuesta unos 30 millones de dólares, y ahora se propone seguir bajándolo en 2024 y 2025, con un costo de 22 millones acumulativos en cada uno de los dos años. Es decir, la baja del IASS va a terminar costando casi 80 millones de dólares anuales a partir de 2025.

La baja del IASS que se propone tiene un efecto equivalente a aumentar las jubilaciones de los que cobran más de \$50.941 pesos por mes (el 25% de mayores ingresos) y en año electoral.

Para poner esta cifra en contexto, sólo en 2022 el gobierno se ahorró 85 millones de dólares por la caída en el valor real de las pasividades que se procesó ese año. O sea, todos los jubilados y pensionistas recibieron 85 millones de dólares menos de los que hubieran tenido que percibir para mantener el mismo poder de compra que el año anterior. Y tengamos en cuenta que en 2021 ya se había verificado una caída en el valor real de las pasividades. De esta forma, con las sucesivas reducciones del IASS, en 2025 se terminará de procesar una redistribución de recursos desde el 75% de las jubilaciones y pensiones de menores ingresos hacia el 25% de mayores ingresos. Esto muestra a las claras la regresividad de la medida.

En 2023 además se bajó el IRPF, con un costo de otros 80 millones anuales. Por tanto, la baja del IASS y del IRPF, cada una, cuestan lo mismo que lo que se asigna en toda esta rendición de cuentas para apuntalar todas las políticas.

¿Estas son las prioridades del gobierno?

La discrecionalidad y la falta de transparencia, una constante de este gobierno.

En cada instancia de presupuesto y de rendición de cuentas hemos solicitado al gobierno que presente la proyección de los créditos presupuestales y su consistencia con las proyecciones fiscales. Seguimos sin tener respuesta del gobierno.

Sin esta consistencia, las proyecciones fiscales carecen de fundamento y como legisladores tampoco podemos evaluar el impacto fiscal que tienen las asignaciones que acá estamos votando.

La transparencia pone límite a la discrecionalidad, y eso es lo que el gobierno no quiere.

Si hubiera transparencia, el gobierno no podría hacer las reasignaciones que hizo en todas las instancias presupuestales.

En cada Rendición de Cuentas vienen reasignando partidas que estaban mal presupuestadas, por error o a propósito, o sea, era imposible que se gastaran, pero fueron útiles para financiar sólo en lo formal, nuevas asignaciones que sí se van a ejecutar.

Además, este gobierno fue aprobando normas que le permiten habilitar créditos por fuera del encuadre presupuestal que presenta. Sólo por poner algunos ejemplos, se facultó a habilitar crédito para crear hasta 1.000 cargos de policías y, en otra oportunidad, se facultó a que habilitara el crédito necesario para cumplir con los acuerdos salariales si las asignaciones que se votaban no eran suficientes, ya que las partidas que se asignaron sólo cubrían los cargos ocupados pero no los vacantes. ¿Queda claro? La mayoría oficialista votó artículos que no se puede saber qué impacto fiscal tendrán.

Ni siquiera hay transparencia en lo que se está asignando en las rendiciones de cuentas. Así el año pasado, el gobierno planteó que la rendición de cuentas del año 2021 incrementaría el gasto en 226 millones de dólares, cuando en realidad el costo de esa rendición de cuentas era de 450 millones de dólares. ¿Por qué ocultarlo?

La única explicación que encontramos, es que a su criterio, el aumento de gasto era excesivo para mostrarlo. Ante los desvíos fiscales que estamos viendo, nos preguntamos si en realidad, esas asignaciones eran consistentes con las proyecciones fiscales presentadas.

Al acercarse las elecciones, el gobierno necesita mostrar resultados y para eso está aumentando el gasto en algunas áreas, pero tratando que no se note demasiado fiscalmente. Por eso recurre a artilugios para gastar y cortar cintas, pero sin registrarlo como déficit fiscal, ni como deuda.

El carnaval electoral y el legado fiscal que ese gobierno va a dejarle al próximo.

Todavía mucho más relevante y grave que lo que comentábamos antes es que los principales incrementos de gasto se realicen por fuera del marco presupuestal y fiscal y, por lo tanto, por fuera de toda autorización del parlamento. Estamos hablando de las inversiones viales del MTOP que se realizan a través de la CVU y de las inversiones para atender la situación de los asentamientos a través de un fideicomiso financiero!!!!!!!

El gobierno gasta, pero no lo registra como déficit fiscal, y compromete recursos a futuro sin tener limitación legal alguna y obligando a que los próximos gobiernos deban registrar y asumir el costo fiscal de las obras que este gobierno está haciendo y mostrando cómo su legado en rutas y en asentamientos.

Estamos hablando de montos muy significativos, que estimamos en el orden del 2% del PIB en tres años. Estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares, tal como se le planteó al equipo económico cuando compareció a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, y que no desmintió.

Estamos hablando de gasto que no pasa por los presupuestos o rendiciones de cuentas y que no es aprobado por el parlamento.

Si este gasto se registrara aumentaría notoriamente el déficit fiscal observado, y comprometería en forma significativa el cumplimiento de todas las metas de la regla fiscal, tanto el resultado estructural, como el tope de gasto y el de endeudamiento.

Si miramos los gastos que se están haciendo “por fuera del perímetro fiscal”, sumadas a las cifras fiscales que sí se registran, estamos asistiendo a un importante deterioro de la situación fiscal, revirtiendo el ajuste fiscal transitorio y de baja calidad de los primeros años de este período de gobierno.

Entonces, ¿de qué sirve anunciar con tanta grandilocuencia una regla fiscal, cuando en realidad después se la usa como “instrumento de dibujo”, que contra lo que se anuncia, no limita en absoluta la discrecionalidad del gobierno?

Las últimas cifras del resultado fiscal publicadas correspondiente al cierre del mes de junio, muestran que el déficit fiscal volvió a deteriorarse nuevamente respecto al mes anterior, y alcanzó en los doce meses cerrados a junio a 4% del PIB. Respecto a septiembre de 2022 se acumula un deterioro de 1,5 puntos porcentuales del PIB. Un deterioro muy importante registrado en sólo 9 meses.

Este deterioro de la situación fiscal se da en el marco de un aumento del peso del endeudamiento, que en términos del PIB aumentó 10 puntos porcentuales respecto al nivel de 2019, y respecto del cual se proyecta una trayectoria levemente creciente para los próximos años.

En síntesis, en este momento nos encontramos con un déficit fiscal similar al de 2019, pero con un nivel de deuda sustancialmente mayor, y una trayectoria a futuro que sigue en aumento.

Queremos cumplir con nuestra responsabilidad de dejar constancia que en 2023 se verificará el incumplimiento de la regla fiscal, con cambios sobre la marcha de las metas -que se aumentan para poder cumplirlas, como sucedió con la meta de resultado fiscal estructural- y también ajustes en los topes de gasto -que se aumentó de 2,1% a 2,8%- y de deuda -que se aumentó 30%-. Y todo esto sin considerar el efecto del comentado no registro de un conjunto muy importante de gastos, que se ejecutan por fuera del “perímetro” de la regla fiscal.

En resumen esta Rendición de Cuentas volvió a dejar claro que la regla fiscal es un instrumento funcional al gobierno, solo sirve para manejar a su antojo las cuentas públicas, con discrecionalidad y falta de transparencia.

Son notorios los problemas de competitividad que exhiben varios sectores, tanto los exportadores, como aquellos orientados al mercado interno que compiten con productos importados.

En efecto, la competitividad precio, medida a través del tipo de cambio real, muestra un deterioro muy significativo desde fines de 2021 a la fecha. El Tipo de Cambio Real global acumula una caída, según estimaciones del BCU, de 14%.

Sin embargo, el gobierno no parece estar dispuesto a tomar cartas en el asunto para cambiar esta situación.

El deterioro de la competitividad agrava la situación de un sector exportador que ha sufrido la sequía, y el retroceso de los precios internacionales de las materias primas agrícolas, los cuales, a pesar de ello, aún con núan en niveles superiores a los registrados durante el período 2015-

2019. Como resultado de estas circunstancias, las solicitudes de exportación cayeron 20% durante los primeros siete meses del año en comparación con el mismo período del año anterior.

A los problemas de competitividad se le suman un conjunto de sectores y áreas de actividad que están teniendo serios problemas relacionados a la derivación de consumo hacia Argentina, por las enormes diferencias de precio que hay con el país vecino. Los problemas han alcanzado a otros sectores que en teoría no deberían estar expuestos a la competencia internacional. Ejemplo de lo anterior son la actividad de bares y restaurantes, actividades recreativas, diversos rubros como farmacias, ropa, zapatos, y servicios vinculados con el cuidado personal y la salud, entre otros.

En cuanto al salario, en el caso de los trabajadores del sector público, al evaluar la evolución de los ajustes se observa que los salarios en el sector público, en base a sus ajustes generales, cerrarán este año con una caída real de 3,5% respecto del nivel de cierre de 2019. Algunos trabajadores del sector público podrán terminar este período de gobierno ganando lo mismo que cinco años atrás, quizás pueda haber alguno que pueda estar al final del período levemente mejor a como estaban en 2019. Lo que no hay dudas, es que existan amplios sectores de trabajadores del sector público que en diciembre de 2020 no habrán recuperado el nivel del salario real de fines de 2019, contra el compromiso asumido por el gobierno.

Una vez más la coalición de gobierno lleva adelante un circo de reasignaciones, presentando más de 200 substitutivos y aditivos a muy pocas horas antes de la votación en comisión o inclusive en el medio de la misma, lo que impide el debido análisis de la normativa.

Pero como si esto fuera poco se intensifican los dibujos presupuestales, faltando el respeto a la discusión parlamentaria, casi como por arte de magia son reducidas partidas del mensaje del Poder Ejecutivo, que entenderíamos tenían su fundamento para ser parte del circo de reasignaciones, y que lejos están de los montos solicitados por los ejecutores.

Los mecanismos engañosos de dibujos presupuestales son casi los mismos que en oportunidades presupuestales anteriores. Nuevamente por arte de magia, la partida asignada para atender los gastos en PPP baja a la mitad, pasando de 64 millones de UI a 33 millones y poco de UI, liberando casi 180 millones de pesos en créditos presupuestales que fueron asignados a varios organismos. Frente a estos engaños, nuevamente nos preguntamos: ¿otro año más que los responsables de hacer las estimaciones presupuestales del MEF, se equivocan en ellas o a propósito, sobreestiman las partidas para transformarlas en bolsones de créditos, donde pueden echar mano para un nuevo circo de reasignaciones de los diputados de la coalición? Cualquiera de las dos respuestas reduce la calidad y la seriedad de la discusión presupuestal.

Los destinos de los recursos mayormente se comparten, como son los redirigidos al incremento de 240 millones de pesos en UDELAR, sin perjuicios que apenas alcance un 6% de los solicitado por la misma, lo que queremos es dejar sentado que esta no es la forma de una discusión presupuestal responsable y seria.

Sin duda un capítulo especial en la magia presupuestal de este gobierno, lo tiene la asignación de los 500 millones de pesos para ANEP, estos recursos habían sido presupuestalmente ejecutado mediante una transferencia a CND para mejorar la infraestructura en educación, pero en el mundo real no fueron ejecutados, ni un ladrillo se usó, seguramente no porque no existieran escuelas para reparar, sino por incapacidad en la gestión y ahora a la incapacidad en la inversión en infraestructura lo llaman “excedente de inversiones” y lo vuelven a asignar presupuestalmente. Esto ya supera la categoría de dibujo presupuestal para pasar a “la tomada del pelo” por la magnitud del excedente.

Y otra perla!!!!!! Recordemos que este gobierno privó de la financiación (vía recaudación impositiva dirigida exclusivamente al INC) la cual se había otorgado durante las administraciones frenteamplistas, y que le daban la potestad real de cumplir con su cometido, justamente al contar con recursos propios que permitieran comprar carteras de tierra. Primero se redirigió esta recaudación impositiva a un programa de vivienda del que por ahora no se muestra resultados

No conformes con lo anterior, el saldo restante de cuando aún regían las herramientas impositivas antes mencionadas, nunca fue transferido al INC desde el MEF, sino que este último conservó los fondos. Es justamente desde estos fondos retenidos que se sacan créditos que pertenecen a Colonización, para financiar la compra de unos padrones que serán de utilidad a una obra de OSE, que este gobierno canceló durante su periodo de administración. A esta maravilla no sabemos qué adjetivos ponerle!!!!!!

Sr. Presidente, sé que muchos integrantes de mi bancada harán otros aportes que terminen de explicar la situación que está viviendo el país hoy, y la herencia negativa que costará no poco sacrificio a los ciudadanos saldar.

No se ha cumplido con ninguna de las principales promesas de campaña:

Se rasgaban las vestiduras por la situación de inseguridad, y no solo la gente no se siente más segura, hoy tenemos a dos ministros en calidad de indagados ante la justicia por la fuga de un narcotraficante pesado.

Se le dijo a la población que el Frente Amplio gastó más en la Educación Pública pero no la mejoró, “mala gestión” dijeron, hoy cayó el gasto por alumno, las horas docentes por alumno, y los resultados medidos por el INEEEd dan muy mal.

Durante la campaña se hicieron enormes tormentas en un vaso de agua por la falta de transparencia del Frente Amplio. Parece una mala broma, cuando hoy vemos la escandalosa entrega del Puerto, el desastre comprobado en que hundieron el servicio de agua potable, cuando actores de gobierno que calzan a la perfección con la definición del “fenómeno de las puertas giratorias” le dan ventajas increíbles a los competidores de Antel.

Y lo peor, lo más triste, lo irreparable, es el aumento de la pobreza infantil. Estos niños que hoy no comen bien, que no tienen los cuidados suficientes para desarrollarse, serán los jóvenes con problemas de aprendizaje en secundaria, o los trabajadores que no encuentren donde insertarse en la sociedad del conocimiento.

Esta es la herencia imperdonable!!!